



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018)

Medio de control: Acción Popular - Cautelares
Radicado: 15001 33 33 004 **2018 00005 00**
Demandante: Eccehomo Vargas Gutiérrez
Demandado: Municipio de Tunja, Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA y Frigorífico ECOTUNJA SAS

Ingresa el proceso con informe secretarial, para decidir lo que corresponda respecto al trámite del recurso de reposición presentado por apoderado del ejecutante.

1. ANTECEDENTES

A folios 35-38 del cuaderno de medidas cautelares, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición en contra del auto de fecha 13 de septiembre de 2018, por medio del cual se negó la práctica de inspección judicial como prueba para resolver la solicitud de medida cautelar y se niegan las medidas cautelares deprecadas por la parte accionante.

2. DEL RECURSO

El recurso de reposición señaló que la parte accionante no comparte la conclusión a la arriba el Despacho, según la cual no se acreditó un hecho concreto que comporte afectación actual o inminente a los intereses colectivos que se pretende amparar, siendo ese el soporte de la decisión de negar la medida cautelar solicitada.

Indicó que si bien no existe una afectación actual de los derechos colectivos, si existiría un riesgo inminente respecto de los mismos, con la mera contemplación del proyecto de construcción de una planta de beneficio animal, pues estimó que negar el decreto de la medida abre la posibilidad de que se proceda con la ejecución del proyecto, causando daños ambientales irreversibles al momento de que una eventual sentencia favorable a sus pretensiones cobre firmeza.

Refirió que en la actualidad la sociedad Frigorífico ECOTUNJA SAS adelanta trámites administrativos para que se le autorice la construcción del proyecto ante distintas autoridades

Señaló que es inminente el riesgo en caso de materializarse el proyecto de construcción del frigorífico o planta de beneficio animal en esa zona, reiterando los posibles efectos ambientales que afectarían fuentes de agua y recursos de fauna y flora presentes en el sector.

Con lo antes expuesto, estimó que se acreditan los requisitos necesarios para el decreto de la medida cautelar solicitada.

Finalmente, solicitó que, en caso de que el Despacho lo considere necesario, se le concediera un término para allegar un dictamen pericial con el que acreditara los daños ambientales que se pretendía evitar, y se requiriera a CORPOBOYACA, para que allegara a este trámite "la totalidad del expediente administrativo que se haya conformado con la solicitud de permiso medioambiental para un punto de perforación respecto de un estudio hidrogeológico elevado por la sociedad Frigorífico ECOTUNJA SAS", con el objeto de sustentar el riesgo al que hace referencia.

3. CONSIDERACIONES

i. Sobre el recurso de reposición contra auto que niega la medida cautelar, se debe partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, que señala:

"Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo¹ y podrán ser decretadas de oficio."

Con relación a los recursos en el trámite de medidas cautelares, se tiene que el artículo 236 del CPACA indica:

"Artículo 236. Recursos. El auto que decreta una medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. Los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días.

Las decisiones relacionadas con el levantamiento, la modificación o revocatoria de las medidas cautelares no serán susceptibles de recurso alguno."

Con lo que se advierte que no existe disposición expresa, ni de la procedencia de la apelación, ni de la exclusión de medios de impugnación respecto del auto que niega la medida cautelar.

No obstante lo anterior el art. 36 de la Ley 472 de 1998 sí contempla que los autos proferidos en curso del trámite de la acción popular, sean susceptibles de reposición, sin discriminarlos por su naturaleza, al señalar:

"Artículo 36. Recursos de reposición.. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil."

Por lo antes expuesto, estima el Despacho que respecto del auto que niega la medida cautelar procede el recurso de reposición, por no haber sido excluido del mismo mediante normas posteriores a la Ley 472 de 1994 que regula de manera general el trámite de las acciones populares.

Ahora bien, en lo que toca con la oportunidad, se debe señalar que los artículos 318 y 319 del C.G.P., disponen frente a este recurso:

"Artículo 318. Procedencia y oportunidades. (...)

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

Artículo 319. Trámite. El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110."

De lo anterior, se infiere que en el caso concreto, el recurso resulta procedente y fue interpuesto en oportunidad, por lo que el Despacho procederá a desatarlo como sigue:

ii) Si bien el accionante manifestó que recurría la decisión que negó inspección judicial como prueba para resolver la medida cautelar, no se encuentran cuestionamientos referidos a la misma, por lo que se confirmará la providencia recurrida en este sentido.

¹ Capítulo Undécimo del Título V de la Parte Segunda del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)

iii) El accionante solicitó la práctica de pruebas (dictamen pericial y documental ya referidos), con el objeto de probar la inminencia de riesgo ambiental ante la eventual construcción de un frigorífico o planta de beneficio animal el sector La Cabaña de la vereda de Runta en el municipio de Tunja, pruebas que serán negadas atendiendo a que dentro del procedimiento para la adopción de medidas cautelares, no se prevé un término para el decreto y práctica de pruebas, y que de conformidad con lo señalado por el artículo 231 del CPACA, entre los requisitos de procedencia de las medidas cautelares se cuenta: *“3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.”*, por lo que la misma deberá resolverse con los documentos e informaciones que sean allegadas con la solicitud o que obren al expediente al momento de la resolverla.

iv) De la lectura del escrito de impugnación, de entrada advierte el Despacho que no se arrimaron a este trámite argumentos distintos de los ya considerados en el auto recurrido, por lo que solo queda reiterar lo expresado en ese proveído, permitiendo adelantar que esa decisión no se repondrá.

Como bien señaló el accionante, el fundamento principal de la negativa estribó en que no se encontró acreditado el daño o la inminencia de este, respecto a los intereses colectivos que se pretenden amparar, de manera que no se puede justificar la necesidad de la medida cautelar, lo que llevó a la negativa de su decreto.

Ahora, con el escrito de reposición, el demandante reiteró los argumentos ya expuestos en la solicitud de la medida, referentes al hipotético daño que implicaría la puesta en marcha de una planta de beneficio animal, y atendiendo a que el accionante insiste en el recaudo de pruebas para acreditar el riesgo que implica la hipotética construcción de la planta de beneficio animal, el Despacho estima pertinente hacer claridad en cuanto a que no se desconocen por parte de este Juzgado los efectos adversos que cualquier actividad industrial implicaría, de desarrollarse una zona de relevancia ambiental, y que no es la falta de acreditación de esas hipótesis lo que fundamentó la negativa en el decreto de la medida cautelar, sino el hecho de que en la actualidad no se ejecutan las actividades industriales que potencialmente afecten los derechos colectivos que se pretenden amparar con la presente acción, es más, ni siquiera se ha emprendido la construcción de infraestructura con esa finalidad, y una situación hipotética sin soporte verificable en la realidad no puede estimarse como un daño o un riesgo inminente que indique la necesidad de implementar medidas en los términos solicitados por el accionante.

Bien señaló el recurrente que en este momento la sociedad Frigorífico ECOTUNJA SAS adelanta trámites administrativos ante las distintas autoridades para *“dar inicio a la construcción del proyecto”*, dentro de los cuales cada autoridad en ejercicio de sus funciones deberá evaluar el lleno de unos requisitos legalmente establecidos para luego establecer en los distintos ámbitos (urbanístico, ambiental, de policía...) la viabilidad del proyecto, sin que este dado a la jurisdicción intervenir para abrogarse las funciones de esas entidades o pretermittirlas.

Así las cosas, se reitera que en el caso concreto no se encuentra demostrada la inminencia del daño, o su materialización, respecto a los intereses colectivos, por lo que no se encuentra para el Despacho, fundada la necesidad y justificación exigida por la ley para decretar medidas cautelares, de conformidad con las finalidades de la misma establecidas en el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, que son *“prevenir un daño inminente o hacer cesar el que se hubiere causado”*.

Finalmente, frente a la inquietud planteada por el accionante por la hipotética puesta en marcha del frigorífico o planta de beneficio, una vez se surtan los trámites administrativos

correspondientes, debe tenerse en cuenta que de conformidad con disposiciones del artículo 233 del CPACA, las medidas cautelares pueden solicitarse en cualquier etapa del proceso, y cuando se acredite un hecho sobreviniente, en virtud del cual se cumpla con las condiciones requeridas para su decreto.

Así las cosas, no habrá lugar a reponer el auto impugnado y, en consecuencia, se confirmará en todas sus partes el auto de fecha 13 de septiembre de 2018.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- Negar las pruebas solicitadas por el accionante, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.


SEGUNDO.- No reponer auto de fecha 13 de septiembre de 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Notifíquese y cúmplase.


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Jueza

²
Cesco

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N° <u>53</u> De Hoy 12 de octubre de 2018 A LAS 8:00 a.m.
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO



² Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 12 de octubre de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Fereny Mauricio Díaz Hernández – Secretario